



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

DEMANDANTE:	Adriana Eslava Cerón
DEMANDADA:	Colpensiones y Porvenir S.A.
TIPO DE PROCESO	Ordinario Laboral
DECISIÓN:	Confirma y adiciona
Radicado	05001-31-05-022-2018-00080-01 (042) 05001310502220180008000

Medellín, a los veinte (20) días de junio de dos mil veintitrés (2023),

AUTO

Conforme con lo dispuesto en los artículos 74 y 75 del Código General del Proceso, en los términos del poder obrante el archivo 03Alegatos de Conclusión Colpensiones -02Segunda instancia, se reconoce personería para actuar en representación de Colpensiones a la doctora Sara Botero García con Tarjeta Profesional 340.780 del Consejo Superior de la Judicatura.

En la fecha indicada la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por las Magistradas **Luz Amparo Gómez Aristizábal**, **María Eugenia Gómez Velásquez**, y **Claudia Angélica Martínez Castillo**, quien actúa como ponente, se reunió para resolver el recurso de apelación de Porvenir SA así como el grado jurisdiccional de consulta que se surte en favor de Colpensiones, en el proceso ordinario laboral adelantado por la señora **Adriana Eslava Cerón** en contra de **Colpensiones, Porvenir S.A. y Protección S.A.**, frente a la decisión adoptada por el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín.

Una vez agotado el procedimiento previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la Sala profiere, por escrito, la siguiente:

SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA.

I. ANTECEDENTES:

1.1 PRETENSIONES.

La señora Adriana Eslava Cerón presentó demanda en contra de Colpensiones, Porvenir S.A. y Protección S.A. buscando se declare la ineficacia del traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (en adelante RAIS), disponiendo la reactivación automática de su vinculación al Régimen de Prima Media (en adelante RPM) sin solución de continuidad; que se condene a Porvenir S.A. y Protección S.A. a trasladar a Colpensiones todos los aportes, rendimiento y cuotas de administración de su cuenta de ahorro individual; la indexación y las costas del proceso.

1.2 HECHOS.

Fundamentó sus pretensiones en que se afilió al ISS el 1° de septiembre de 1982 con un total de semanas de 382.86 cotizadas; se trasladó al RAIS administrado por Porvenir S.A. el 23 de junio de 1999; y a la fecha se encuentra afiliada a Protección S.A.; sin embargo, aduce que ninguna de las entidades le brindó la debida información acerca de las implicaciones de su traslado.

1.3 CONTESTACIÓN DEMANDADAS.

Admitida la demanda e integrada la litis, las demandadas allegaron respuesta oportuna, así:

Colpensiones aceptó los hechos relacionados a la afiliación al ISS; el traslado al RAIS a Porvenir, la reclamación administrativa resuelta en forma negativa por dicho ente, de los demás hechos; dijo que no le constan de la afiliación de la demandante a Protección S.A. ni los relacionados con la afiliación a los fondos privados Porvenir y Protección, por ser situaciones ajenas a la entidad; oponiéndose a las pretensiones dirigidas en su contra y proponiendo las excepciones de inexistencia de la obligación demandada y falta de derecho para pedir, imposibilidad jurídica para cumplir con las obligaciones pretendidas, buena fe y prescripción.

Porvenir S.A. señaló que no consta de la fecha de afiliación de la actora, las semanas cotizadas, ni la afiliación al extinto ISS a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, los hechos relacionados con la afiliación de ésta a Protección SA,, ni la totalidad de semanas cotizadas a la fecha, ni de la reclamación administrativa ante Colpensiones y la respuesta emitida, por ser hechos de terceros; negó los hechos relacionados a la afiliación a Colpatria, ni la relativa a la información suministrada por Porvenir al momento de su afiliación, ni las peticiones elevadas ante esa entidad, ni del traslado solicitado a Colpensiones resuelta en forma negativa. Se opuso a las pretensiones de la demanda y formuló las excepciones de: prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación, y compensación.

Protección S.A. tuvo como ciertos le entrada en vigencia del RAIS de las AFP, su afiliación en dicho ente, que no consta de los hechos relativos a la afiliación de la demandante al ISS hoy Colpensiones ni a Porvenir, por ser hechos de terceros ajenos a ellos; negó los hechos los hechos que hablan de una indebida información, y las situaciones personales con respecto al proceso de traslado. Se opuso a las pretensiones de la demanda y formuló las excepciones de: inexistencia de la obligación frente a ese fondo, no inversión de la carga de la prueba, no existió ningún vicio en el consentimiento al firmar la afiliación, la parte demandante incumplió su deber de informarse, la AFP Protección SA no es poseedora de los dineros que se encuentran en las cuentas de ahorro individuales que administra, inexistencia de obligación legal de realizar cálculos comparativos y de guardar dichos documentos.

1.4 SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

El Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 30 de enero de 2023, dispuso:

PRIMERO: Se DECLARA la ineficacia del traslado que hizo ADRIANA ESLAVA CERÓN de cédula de ciudadanía 35462757 en junio 23 del año 1999 desde el RSPMPD al RAIS a la AFP COLPATRIA (hoy PORVENIR) y de la continuidad en ese régimen en PROTECCIÓN hasta la actualidad luego de traslado entre AFPs en diciembre 12 del año 2002 a la AFP SANTANDER. Y se DISPONE que la parte actora ha estado vinculada, sin solución de continuidad, en el RSPMPD y se CONDENA a COLPENSIONES como actual administradora de ese régimen a tener a la parte demandante como su afiliada y a consolidar en la historia pensional de la parte demandante todo el tiempo servido o cotizado al SGP sólo en RSPMPD.

SEGUNDO: Se CONDENA a la codemandada a PROTECCIÓN como actual administradora de los recursos pensionales de la parte actora a trasladar a la ejecutoria de este fallo, al

RSPMPD todos los valores de la cuenta de ahorro individual de la parte actora que incluyan además de los aportes concretamente destinados a la CAI, los rendimientos. Y también se CONDENA a PORVENIR y a PROTECCIÓN a devolver, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de este fallo, de sus propios peculios y debidamente indexados, los valores de los aportes pensionales que recibieron de la parte accionante o en su favor destinados a cuotas o gastos de administración del artículo 20 de la Ley 100 de 1993; y se CONDENA a COLPENSIONES a recibir y/o a cobrar esos dineros.

TERCERO: Se DECLARAN como no probadas las excepciones de fondo propuestas por las codemandadas.

CUARTO: Se CONDENA a PORVENIR y PROTECCIÓN en costas en favor del demandante y como agencias en derecho para cada uno de los 2 casos se FIJA el valor equivalente a 2 smmlv para el momento de liquidación de las costas.
No hay costas a cargo ni en favor de COLPENSIONES.

QUINTO: Se ORDENA enviar el expediente y la causa al Honorable Tribunal Superior de Medellín para que en la Sala De Decisión Laboral conozca del asunto en grado jurisdiccional de CONSULTA en favor de COLPENSIONES LA NACIÓN.

1.5 RECURSO DE APELACIÓN.

Porvenir S.A. interpuso recurso de apelación parcial del numeral 2, argumentando que no hay lugar a ordenar la devolución de gastos indexados, porque han ganado rendimientos superiores a los que podía haber conseguido en el régimen de prima media por lo que no hubo pérdida del poder adquisitivo, y que no se desvirtuó su buena fe; por lo que solicita se revoque la condena.

II. ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA

Colpensiones esgrime como argumentos que no es procedente imponerle la carga de recibir y pensionar a afiliados que en muchos años anteriores deciden libre y voluntariamente cambiar de régimen y fondo pensional; y cuando están próximos a pensionarse deciden cambiar de régimen, pues el demandante decidió elevar su solicitud de traslado cuando ya estaba próximo a pensionarse y que además no cotizo al régimen de prima media por más de 20 años, sino que la mayoría de su vida laboral las realizó en un fondo privado; que la carga de la prueba no debe tornarse netamente a los fondos de pensiones y que se demostró que el demandante realizó conductas tales como: cambiar a un fondo privado, realizar aportes, permanecer en el fondo privado y esperar pensionarse en ese fondo, tales actos llevan a presumir su voluntad de pertenecer al régimen de ahorro individual.

Porvenir reitera los argumentos expuestos en primera instancia, y señala que si lo que se pretende es declarar la ineficacia que prevé el artículo 271 de la Ley 100 de

1993, esta norma sin lugar a interpretaciones distintas establece que cualquier persona natural o jurídica, que hubiera realizado actos atentatorios contra el libre derecho de elección del afiliado, se haría acreedor a una multa ADMINISTRATIVA impuesta por el Ministerio de Trabajo. Si bien menciona que, quedará sin efecto la afiliación, no hace referencia si quiera por aproximación a lo dispuesto en los artículos 1740 y subsiguientes, por un principio básico de derecho, cual es el de la inescindibilidad de las normas, que impide acudir en forma indiscriminada a diferentes disposiciones legales para resolver un asunto en concreto; que a la actora se le garantizó el retorno al RPM, sin que ejerciera esta facultad. Que a la fecha de celebración del acto jurídico únicamente debía dejar constancia de la libre escogencia a través del formulario de vinculación, sin que, también tuviera la necesidad de registrar en documentos o a través de testigos o cualquier otro medio de prueba que, le suministró la información necesaria y objetiva acerca de las condiciones, y requisitos para acceder a la pensión de vejez a los futuros afiliados.

Demandante el apoderado del demandante manifiesta que la AFP no cumplió con el deber de información al momento de la afiliación, y que se cumplen las reglas jurídicas señaladas en la línea jurisprudencial para declarar la ineficacia; por lo que en consecuencia opera la nulidad del traslado.

La apoderada judicial de Protección SA manifestó que no haría uso del traslado para alegar en segunda instancia.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1 PRESUPUESTOS PROCESALES Y ALCANCE DEL RECURSO

Conoce la Sala de los recursos de apelación y de la consulta de la sentencia a favor de Colpensiones de conformidad con lo señalado en los artículos 66A y 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

3.2 PROBLEMA JURÍDICO

Esta Sala analizará, si se declara la ineficacia del traslado de la demandante Adriana Eslava Cerón, con el consecuente regreso al RPM administrado por Colpensiones, y, si es así, establecerá sus consecuencias.

3.3 HECHOS RELEVANTES PROBADOS

De acuerdo con el acervo probatorio arrojado, no hay duda que la demandante nació el 28 de abril de 1959 como se observa en su cédula de ciudadanía (pdf 4 archivo 15 contenido expediente administrativo), y se afilió al RPM hoy administrado por Colpensiones, el 2 de septiembre de 1986, como se infiere de la historia laboral expedida por Colpensiones (pdf 2 carpeta archivo 15 Expediente administrativo); posteriormente se trasladó al RAIS administrado por Colpatria hoy Porvenir S.A. sin que se haya allegado solicitud de vinculación, sino una certificación donde consta que la afiliación de la demandante data del 1 de agosto de 1999 (folio 79 archivo 79 Contestación Porvenir), el 10 de diciembre de 2002 suscribió formulario de vinculación a Santander hoy Protección SA, y posteriormente formulario de afiliación a Protección SA el 29 de noviembre de 2011 (folio 01, 16 y 17 archivo 09 contestación demanda Protección).

3.4 INEFICACIA DEL TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL.

El primer aspecto es recordar que, según el literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, la selección de cualquiera de los regímenes previstos en el literal a) de esa disposición es libre y voluntaria, de manera que, cuando un empleador o cualquier persona natural o jurídica, desconozca ese derecho, sea acreedor a las sanciones del inciso 1° del artículo 271 de la misma ley, de acuerdo con ella, cualquier persona que atente contra el derecho del trabajador a su afiliación, traerá como consecuencia que la afiliación quedará sin efecto.

Lo segundo es que, aunque la afiliación es libre y voluntaria, las administradoras de pensiones están compelidas a cumplir con el deber de información, de modo que la decisión de traslado esté precedida del cumplimiento de ese mandato.

Ahora, según el artículo 97, numeral 1° del Decreto 663 de 1993, las administradoras de fondos de pensiones deben suministrar información necesaria y transparente a los afiliados, «de suerte que les permita, mediante elementos de

juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado y tomar decisiones informadas».

Por información necesaria, la Sala de Casación Laboral ha afirmado que comprende:

(...)la descripción de las características, condiciones, acceso y servicios de cada uno de los regímenes pensionales, de modo que el afiliado pueda conocer con exactitud la lógica de los sistemas públicos y privados de pensiones», y respecto a la transparencia, ha explicado que implica la obligación de dar a conocer al usuario, en un lenguaje claro, simple y comprensible, «los elementos definitorios y condiciones del régimen de ahorro individual con solidaridad y del de prima media con prestación definida, de manera que la elección pueda realizarse por el afiliado después de comprender a plenitud las reglas, consecuencias y riesgos de cada uno de los oferentes de servicios» (CSJ SL1452-2019, reiterada en SL1688-2019 y SL1689-2019).

El fondo de pensiones es responsable de proporcionar e indicar al usuario que pretende trasladarse de régimen, los elementos determinantes para tomar una decisión informada. En ese orden, el traslado no surte efectos cuando se le oculta información o no se le brinda en forma completa, porque en ese caso no existe una decisión verdaderamente libre y voluntaria, ya que la determinación de trasladarse de régimen pensional puede variar según la información que se brinde (sentencias CSJ SL373-2021 MP Clara Cecilia Dueñas Quevedo; CSJ SL12136-2014 MP Elsy del Pilar Cuello Calderón y CSJ SL17595-2017 sentencia de instancia)

Por lo tanto, no es posible evidenciar un verdadero consentimiento informado en quien carece de los elementos suficientes para adoptar una decisión adecuada a sus circunstancias particulares, de manera que es insuficiente afirmar que el afiliado expresó su voluntad al permanecer en el RAIS y que su vinculación conserva validez, cuando la administradora incumplió la obligación de brindarle la información necesaria, en obediencia a lo establecido en los artículos 2 y 12 del Decreto 663 de 1993.

Así, cuando el afiliado alega la falta de información o la mala entrega de esta por parte de la AFP, como ocurre en este caso, la administradora tiene sobre sí la carga de demostrar el cumplimiento de esa obligación, por cuanto: «*la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo*» (artículo 1604 CC).

De tal manera que, al haberse indicado por el actor que «*no recibió la información*», por tratarse de una negación indefinida, lo releva de probar ese hecho y a su vez,

traslada la carga de la prueba en el demandado, quien deberá probar en contrario, es decir, que sí proporcionó la información completa y suficiente, en las etapas preparatorias y previas al traslado.

Así, se reitera que la carga de la prueba, sin importar la circunstancia particular del afiliado, está a cargo de las AFP, toda vez que: (i) la afirmación de no haber recibido información corresponde a un supuesto negativo indefinido que solo puede desvirtuar el fondo de pensiones mediante la prueba que acredite que cumplió esta obligación; (ii) la documentación soporte del traslado debe conservarse en los archivos del fondo, dado que es esta entidad la que está obligada a observar la obligación de brindar información y, más aún, probar ante las autoridades administrativas y judiciales su pleno cumplimiento, y (iii) no es razonable invertir la carga de la prueba en contra de la otra parte de la relación contractual, ya que las entidades financieras por su posición en el mercado, profesionalismo, experticia y control de la operación, tienen una clara preeminencia respecto al afiliado lego (CSJ SL1452-2019, SL1688-2019, SL1689-2019 y SL4426-2019).

En ese orden, la constatación de que se cumplió con el deber de información es ineludible, por lo que la simple firma del formulario de afiliación es insuficiente para acreditar el consentimiento informado del afiliado. Este es el criterio postulado por la CSJ en su Sala Laboral, en la sentencia SL19447-2017:

el acto de afiliación o traslado de régimen pensional debe estar acompañado de la decisión libre y voluntaria del afiliado, la cual no se limita a la simple manifestación de quien decide trasladarse, sino que debe ajustarse a los parámetros de libertad informada, es decir, la solicitud y trámite de traslado de régimen pensional, debe estar precedida de una información clara, comprensible y suficiente, sobre las consecuencias favorables y desfavorables que su decisión acarrea» (CSJ SL7561-2021, CSJ SL5595-2021, CSJ3719-2021),

Ahora, el hecho de que el afiliado hubiese suscrito el formulario de vinculación o que en el mismo se empleen leyendas o afirmaciones tales como que «la afiliación se hace libre y voluntaria», «se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones» u otras similares que suelen consignarse en los formatos preimpresos, no liberan a las AFP de su obligación de cumplir de manera rigurosa y de buena fe su deber de información. A lo sumo, estas expresiones sirven para acreditar un consentimiento sin vicios, pero no uno debidamente informado (CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31314, SL, 22 nov. 2011, rad. 33083, SL4964-2018, SL12136-2014, SL19447-2017, SL4964-2018, SL1421-2019 y SL2877-2020).

Se insiste, que las AFP cumplan el deber de información y su acreditación en el proceso no se puede demostrar con las simples manifestaciones genéricas del afiliado de aceptar las condiciones del traslado, pues ellas son insuficientes ya que quien debía probar la diligencia y cuidado era quien estaba obligado a emplearla, en este caso la administradora del fondo pensional (CSJ SL4964-2018).

En ese orden de ideas, al presentarse el traslado de la carga de la prueba del afiliado a las Administradoras de Fondos de Pensiones, por ser estas las que cuentan con los medios técnicos y los conocimientos respecto a los servicios que ofrecen, era cada fondo Porvenir S.A. y Protección S.A., quienes debían probar en el proceso respectivamente, que brindaron una asesoría personalizada y completa a la demandante al momento de su traslado, analizando las circunstancias particulares de su caso.

Y, es que las AFP desde su creación, tienen el deber, de suministrar información objetiva, comparada y transparente sobre las características, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, así como de las consecuencias jurídicas del traslado, como de ello da cuenta el artículo 97, numeral 1.º del Decreto 663 de 1993, en armonía con el artículo 13, literal b) de la Ley 100 de 1993 (CSJ: SL1452-2019, SL1688-2019, SL1689-2019, SL3464-2019, SL4360-2019, SL2611-2020, SL4806-2020 y SL373-2021).

Deben informar por ejemplo, que existen diferentes modalidades pensionales, que el valor de la pensión de vejez en el RAIS depende del capital consignado en la cuenta de ahorro individual; que si no completa el capital suficiente para obtener por lo menos una pensión mínima -equivalente al 110% del SMLMV a la fecha de expedición de la L.100/93, actualizado con el IPC (Índice de Precios al Consumidor), debe seguir cotizando, si es o no beneficiario del régimen de transición pensional y las ventajas que se derivan del mismo, así como efectuarle las proyecciones aritméticas y los comparativos necesarios hacia el futuro de ambas opciones, con el cálculo aproximado del monto pensional que le correspondería, y en fin, mostrarle al afiliado **con detalle**, las ventajas y desventajas de tomar la decisión de traslado de régimen pensional, para que la misma sea realmente libre y voluntaria.

Y es que debe reiterarse que, la labor del funcionario del fondo privado de pensiones en el momento previo a hacer efectivo el traslado de régimen, debe trascender al “*deber del buen consejo*”, como lo ha señalado la jurisprudencia laboral, en la medida que es responsabilidad de dichas administradoras y de sus promotores, velar por la información suministrada a sus usuarios -art. 10 D.720/94- por el cual se reglamentaron los artículos 105 y parcialmente el 287 de la Ley 100 de 1993.

Ahora, si bien tanto Porvenir S.A. como Protección S.A. afirmaron al contestar la demanda que a la actora se le brindó la asesoría requerida para el caso (archivo 31 y archivo 09, carpeta 1), de acuerdo con la jurisprudencia ya descrita, tenían la carga de acreditarlo, sin embargo, no aportaron prueba que dé cuenta de la información realmente suministrada a la demandante en ese momento, adicional que, como lo viene sosteniendo la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la oportunidad de **la información se juzga es al momento del acto jurídico del traslado de régimen pensional**, y no con posterioridad a aquel.

Así las cosas, en el caso a estudio considera la Sala que se incumplió uno de los presupuestos para la eficacia del acto de traslado de régimen pensional, esto es, el deber de información, cuya ausencia, dada su incidencia en el derecho pensional, trae como consecuencia la declaración de ineficacia del traslado de régimen pensional, y con ello, que las cosas vuelvan al estado anterior en el que se encontraban antes de aquella como que el demandante nunca se trasladó al RAIS. Razón por la que en este punto se confirmará la decisión.

3.5 CONSECUENCIAS DE LA DECLARATORIA DE INEFICACIA DEL TRASLADO.

La declaratoria de ineficacia implica que las cosas vuelven al mismo estado en que se hallarían de no haber existido el cambio, esto es, se priva de todo efecto práctico al traslado «*bajo la ficción jurídica de que aquella nunca se trasladó al RAIS o, más bien, siempre estuvo afiliada al régimen de prima media con prestación definida*» (CSJ SL1689-2017).

Por lo tanto, considera la Sala que al declararse la ineficacia del traslado del demandante del RPM al RAIS, todos aquellos actos jurídicos que se celebraron con

posterioridad a la suscripción de dicha afiliación pierden su fuerza vinculante; por lo que es legítimo que Protección S.A., como la AFP la cual se encuentra actualmente afiliada la actora, traslade a Colpensiones no solo el saldo de la cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros, sino también, los porcentajes destinados a gastos de administración, primas de seguros previsionales y al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados, como ha determinado la jurisprudencia uniforme de nuestro órgano de cierre jurisdiccional desde la sentencia con Rad 31989 del 9 de sept/08, M.P. Eduardo López Villegas, reiterada en las SL 4989 y 4964 del 14 de nov/18, radicados 47.125 y 54.814, respectivamente, M.P. Gerardo Botero Zuluaga, SL 1688 del 8 mayo/19, SL 2877 del 29/07/2020, Rad. 78667, M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, SL 3034 Rad. 86961 del 07/07/2021; 3571 Rad. 88476 del 04/08/2021; 3708 Rad 88556 del 18/08/2021; 3709 Rad. 88875 y 3710 Rad. 88550 del 18/08/2021; 3769 Rad, 84296 del 11/08/2021, SL755 Rad 90519, SL756 Rad 90548 del 09/03/2022 y SL1019 Rad 87915 del 16/03/2022, M.P. Luis Benedicto Herrera Díaz; y SL843 Rad 85499 del 16/03/2022 M.P. Gerardo Botero Zuluaga.

Según el grado jurisdiccional de consulta favorable a Colpensiones, la Sala adicionará el fallo de primer grado para disponer que el traslado de los recursos que realicen los fondos privados deberá hacerse con el suministro de la información prevista en el artículo 2.2.2.4.8 del Decreto 1833 de 2016 -por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones-, esto es, entregando la historia laboral del afiliado con la información discriminada y detallada por cada período cotizado, especificando cada valor, “...*junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen* ...”.

Así mismo se aclarará el numeral segundo, de la sentencia objeto de alzada, puesto que el juez de la causa ordenó los traslados a cargo de las AFP en un término de 1 mes a partir de la ejecutoria de la sentencia, empero, en virtud de la igualdad procesal, no puede desconocerse el precedente reiterado de esta Sala, que ha señalado que las obligaciones de traslado que recaen en los fondos privados se deben realizar en los 30 días siguientes a la ejecutoria de la providencia –art. 16 Decreto 692 de 1994–. Por lo que se ordenará a la AFP Porvenir S.A. y a Protección S.A. que realicen los traslados y/o restituciones a que haya lugar en un término no superior a 30 días contados a partir de la ejecutoria de la sentencia.

3.6 PRESCRIPCIÓN

No se llama a prosperar la excepción de prescripción por cuanto la acción sobre el traslado de régimen pensional guarda relación inescindible con los requisitos y valor de la pensión, por lo que se debe predicar la imprescriptibilidad de la acción, ver al respecto Sentencia SL-1421 de 2019, Radicado No. 56174 de 10 de abril de 2019.

En efecto, de manera reiterada y pacífica, la SCL de la Corte ha defendido la tesis de que las acciones judiciales encaminadas a que se compruebe la manera en que ocurrió un hecho o se reconozca un estado jurídico, son imprescriptibles. Lo anterior, bajo la premisa de que ni los hechos ni los estados jurídicos prescriben, a diferencia de lo que ocurre con los derechos de crédito y obligaciones que de ello surjan.

Conforme con las razones fácticas, probatorias y de derecho expuestas en precedencia, la sentencia revisada en apelación y consulta se adicionará, aclarará y confirmará en todo lo demás.

Costas de segunda instancia a cargo de Porvenir SA y en favor de la demandante por no prosperar el recurso de apelación. Las agencias en derecho se fijan en \$1.160.000 pesos.

En mérito de lo expuesto, la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

IV. RESUELVE

PRIMERO: Adicionar el numeral **Segundo** de la sentencia proferida por el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín, el 30 de enero de 2023, ordenándose que la obligación de traslado impuesta a **Protección S.A.** deberá realizarse entregando la historia laboral del afiliado con la información discriminada y detallada por cada período cotizado, según las consideraciones de esta sentencia.

SEGUNDO: Aclarar el numeral segundo de la sentencia objeto de alzada, en el sentido de que las órdenes de traslado impartidas a Porvenir S.A. y a Protección S.A., deberá realizarse en un término no superior a 30 días contados a partir de la ejecutoria de la sentencia.

TERCERO: Confirmar en lo demás la sentencia revisada en apelación y consulta.

CUARTO: Costas de segunda instancia a cargo de Porvenir SA y en favor de la demandante por no prosperar el recurso de apelación. Las agencias en derecho se fijan en \$1.160.000 pesos.

Lo resuelto se notifica por **EDICTO**.

Las Magistradas,


CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL


MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ